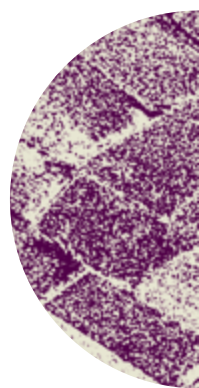




1

**Un nuevo horizonte
de oportunidades
para el mundo rural**



Mensajes clave

El desarrollo económico de América Latina y el Caribe (ALC) está estrechamente ligado a sus territorios rurales, donde se concentran recursos estratégicos como la producción de alimentos, la energía, la biodiversidad, los bosques y los minerales críticos.

A pesar de su relevancia para el producto y la estructura productiva de los países, los territorios rurales concentran rezagos persistentes en pobreza, acceso a servicios básicos, calidad del empleo y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La ruralidad contemporánea ya no se identifica exclusivamente con actividades primarias. Se observa una creciente diversificación sectorial del empleo y los ingresos rurales hacia los servicios y las distintas etapas de las cadenas de valor.

El proceso de cambio estructural en ALC redujo el peso en el empleo y el valor agregado del sector agropecuario, aunque este continúa teniendo una relevancia significativa en la mayoría de las economías de la región.

El sector agropecuario muestra un desempeño dinámico en términos de productividad, aunque con marcadas heterogeneidades y amplios márgenes para mejorar de manera sostenible.

La demanda internacional de alimentos diferenciados abre oportunidades para que ALC consolide su posición como proveedor neto de alimentos al mundo, pero también exige profundas adaptaciones productivas.



El aumento de la productividad agropecuaria es necesario, pero insuficiente: el desarrollo de cadenas de valor agroalimentarias y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos son clave para amplificar el impacto del sector sobre el desarrollo rural y diversificar los ingresos de la población rural.



Los territorios rurales son estratégicos en el nuevo escenario energético por sus recursos y potencial productivo, pero aprovechar estas oportunidades exige gestionar adecuadamente sus riesgos ambientales y sociales.



Los sectores forestal, pesquero, acuícola y turístico tienen un alto potencial productivo y pueden, además, beneficiar a las comunidades locales al generar empleo, fortalecer la seguridad alimentaria, diversificar los ingresos y favorecer la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos.



Aprovechar plenamente las oportunidades que presenta el mundo rural requiere políticas públicas e instituciones capaces de agregar valor, diversificar las actividades productivas y cerrar las brechas estructurales de bienestar.

Un nuevo horizonte de oportunidades para el mundo rural¹

Introducción

El desarrollo económico de América Latina y el Caribe (ALC) está estrechamente ligado a sus territorios rurales. En ellos se concentran recursos estratégicos para la región, como la producción de alimentos, la energía, la biodiversidad, los bosques y los minerales críticos. En las áreas rurales vive una población cercana a 120 millones de personas y se localizan cerca de 18 millones de unidades productivas agropecuarias. Estas zonas constituyen, así, una base central para la seguridad alimentaria, la transición energética y el desarrollo sostenible regional.

No obstante, estos espacios también presentan algunos de los rezagos sociales, económicos y ambientales más persistentes de ALC. La pobreza, la informalidad, las brechas en el acceso a servicios básicos y las limitaciones de infraestructura coexisten con una productividad promedio baja, aunque altamente heterogénea entre sectores y unidades productivas. Esta combinación de factores reduce la capacidad

de estos territorios para transformar la riqueza de sus recursos en bienestar para las comunidades locales, generando brechas sistemáticas con las áreas urbanas y un rezago sostenido respecto a múltiples metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esa situación no solo afecta las oportunidades de vida de la población rural, sino que también condiciona el desempeño económico agregado de la región. Un patrón basado principalmente en la explotación de productos primarios con bajo valor agregado restringe la generación de empleo de calidad y limita la capacidad de diversificar las economías locales. Fortalecer los encadenamientos dentro de las cadenas vinculadas al agro, la transición energética y otras actividades de fuerte impacto local tiene el potencial de ampliar las fuentes de ingreso, reducir las vulnerabilidades y promover un crecimiento más inclusivo y sostenible.

¹ Este capítulo fue elaborado por Dolores de la Mata y Juan Odriozola con la asistencia de investigación de Juan Barnes, Belén Cañuelo, Delfina Silva y Emilse Vargas.

Desde esta perspectiva, este Reporte de Economía y Desarrollo (RED) parte de la premisa de que el crecimiento rural y el desarrollo económico agregado son procesos inseparables. Las áreas rurales albergan oportunidades productivas significativas, cuyo aprovechamiento requiere agregar valor, diversificar las cadenas y potenciar los encadenamientos económicos. Para que estas transformaciones se materialicen, resulta indispensable contar con políticas adecuadas e instituciones robustas que permitan cerrar brechas estructurales y sostener un proceso inclusivo y sostenible.

Este capítulo comienza con una conceptualización de la ruralidad y una descripción de las brechas

sistemáticas de bienestar que sufren las poblaciones rurales de ALC. Luego se esboza el proceso de cambio demográfico y estructural ocurrido en la región, junto con la evolución de la productividad de los principales sectores económicos. Además, se abordan los desafíos que enfrentan las poblaciones rurales en los diferentes sectores económicos, incluidos los retos transversales que plantean la sostenibilidad ambiental y social. Asimismo, se examinan las oportunidades que surgen de actividades económicas típicas de las áreas rurales, pero también de otras vinculadas a la transición energética y ambiental, para anticipar algunas de las políticas necesarias para aprovecharlas. Esos temas se examinan con profundidad a lo largo del reporte.

¿Qué comprende el mundo rural?

Este reporte pone el foco en las personas que habitan en las áreas rurales y en las actividades productivas que allí se desarrollan. Comprender lo rural requiere considerar dos dimensiones que, aunque relacionadas, no coinciden completamente. Por un lado, se encuentra la dimensión sectorial, vinculada a ciertas actividades económicas, especialmente las primarias. Por el otro, está la dimensión territorial, asociada a la localización geográfica y las características de los asentamientos poblacionales.

Históricamente, ambas dimensiones han estado estrechamente vinculadas: lo rural se identificaba con el sector agropecuario y con territorios de baja densidad poblacional. Sin embargo, el cambio estructural ha transformado de manera sustantiva esta relación. Muchas actividades primarias, como la agricultura, la minería, la pesca o la silvicultura, siguen

localizándose mayormente en entornos rurales por su dependencia de los recursos naturales y las condiciones geográficas. Pero en la actualidad, una parte creciente del empleo y del ingreso de quienes viven en áreas rurales proviene de otros sectores, como los servicios, la construcción, el turismo o la producción de energía, tendencia que se ha intensificado en las últimas décadas.

Esta separación entre territorio y actividad económica implica que no todas las personas que habitan en áreas rurales se dedican a actividades primarias, ni todas las actividades primarias son realizadas por población rural. Esta desconexión parcial entre dónde viven las personas y a qué se dedican es un rasgo central de la ruralidad contemporánea y plantea desafíos importantes tanto para su definición como para el diseño de políticas de desarrollo territorial.

Delimitación de las áreas y la población rurales

La delimitación de lo rural plantea desafíos conceptuales y empíricos. En la práctica, no existe una definición única y universal de qué constituye un área rural. Los países utilizan criterios diversos para clasificar su

territorio, reflejando diferencias demográficas, productivas y administrativas (Comisión Europea et al., 2024; Nelson et al., 2021).

En ALC, la definición de ruralidad ha sido tradicionalmente binaria y establecida por oposición a lo urbano. El criterio más utilizado es el tamaño poblacional, con umbrales frecuentemente cercanos a los 2.000 habitantes, aunque en muchos países se complementa con densidad, acceso a servicios, características de la infraestructura o tipo de actividad económica predominante (ver el recuadro 1.1). En otros casos, la delimitación responde principalmente a divisiones administrativas. Esta heterogeneidad dificulta la comparación entre países y puede ocultar la diversidad interna de los territorios rurales.



Bajo las definiciones nacionales vigentes, la población rural de ALC alcanzó en 2025 aproximadamente 120 millones de personas, cerca del 18 % de la población total de la región

Bajo las definiciones nacionales vigentes, la población rural de ALC alcanzó en 2025 aproximadamente 120 millones de personas, cerca del 18 % de la población total de la región (Celade-División de Población de la CEPAL y DPNU, 2024). Su peso relativo ha disminuido de manera sostenida desde mediados del siglo XX y las proyecciones indican que esta tendencia continuará en las próximas décadas. En términos absolutos, la población rural total ha bajado desde principios de los años 2000.

Recuadro 1.1

Definiciones nacionales de áreas rurales

En el mundo existe una gran heterogeneidad en las clasificaciones nacionales de ruralidad. La mayoría opta por la densidad demográfica como criterio primordial. Más de la mitad combina el tamaño o la densidad con otros criterios (108 países y territorios), pero solo 37 los utilizan como único parámetro (UNDESA, 2019).

Esta diversidad de enfoques es particularmente evidente en América Latina y el Caribe. El cuadro 1 muestra las definiciones usadas en 20 países de la región. Si bien el tamaño de la población es el criterio más recurrente, puesto que 10 de los 20 lo utilizan, solo cuatro de ellos (Argentina, Bolivia, México y Uruguay) lo adoptan como criterio único. Incluso dentro de los criterios demográficos existen matices. Países como Perú y Colombia, por ejemplo, incorporan la densidad en sus definiciones, pero medida por la concentración de viviendas y no directamente de la población.

Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Panamá tienen en cuenta en sus definiciones aspectos de la infraestructura, como el acceso a servicios de luz y agua, la existencia de calles pavimentadas o la disponibilidad de comercios. Otros países, como Chile, integran criterios económicos, como la proporción de población en actividades primarias. Otro grupo basa sus delimitaciones únicamente en criterios de carácter administrativo, como en República Dominicana y El Salvador.

Cuadro 1

Definiciones de ruralidad adoptadas en países de América Latina y el Caribe

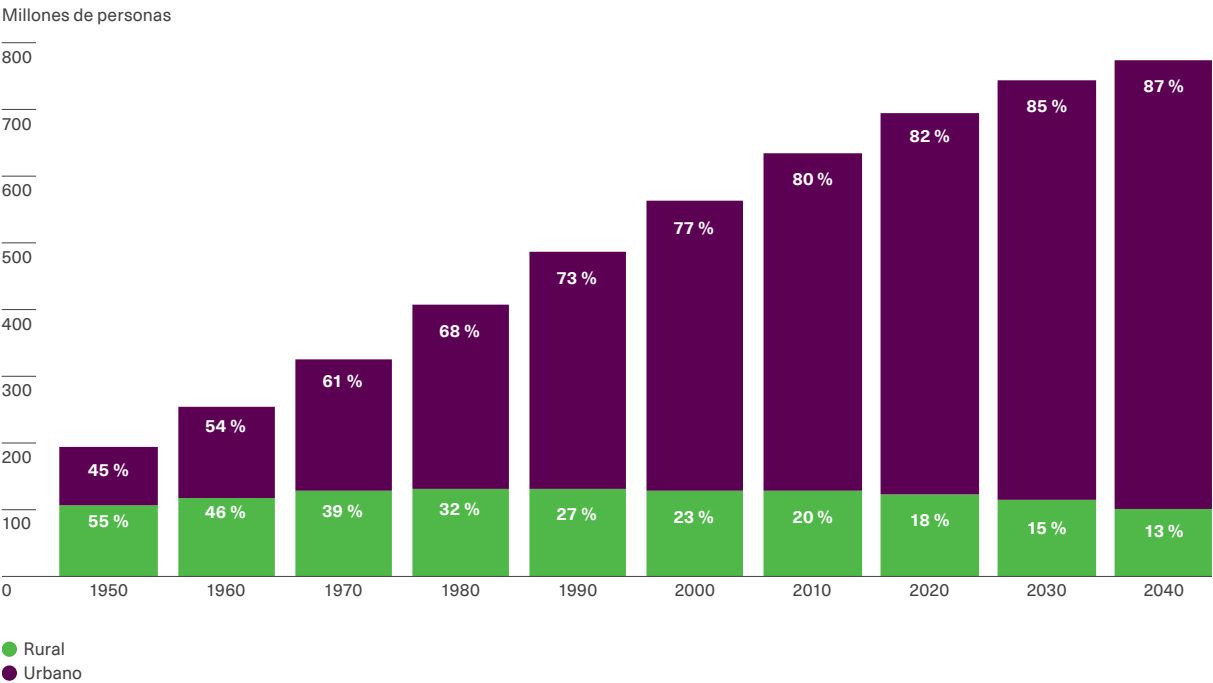
País	Definición de ruralidad	Tipo de criterio
Argentina	Localidad con menos de 2.000 habitantes, incluyendo la población diseminada en el territorio. Urbano se define como el centro poblado con 2.000 habitantes o más.	Población
Bolivia	Centros poblados con menos de 2.000 habitantes.	Población
Brasil	Población que reside fuera de los límites de las ciudades (sedes municipales), las villas (sedes distritales) y las áreas urbanas aisladas oficialmente definidas.	Administrativo
Chile	Asentamiento humano con 1.000 habitantes o menos o con una población entre 1.001 y 2.000 habitantes cuando más del 50 % de su fuerza laboral se dedica a actividades económicas primarias.	Población y económico
Colombia	Se define a partir de la clasificación del territorio fuera de las cabeceras municipales. Comprende los centros poblados (conjunto de 20 o más viviendas contiguas con cierta infraestructura y servicios básicos, localizados fuera del área urbana [cabecera]) y el rural disperso (viviendas aisladas o dispersas, sin trazado urbano definido ni servicios públicos domiciliarios, ubicadas fuera de los centros poblados y cabeceras).	Características urbanas y administrativo
Costa Rica	Territorio fuera de los centros urbanos administrativos. Se distingue entre rural concentrado (50 o más viviendas agrupadas con servicios básicos) y rural disperso (resto del territorio). Se designa como urbano al centro administrativo con cuadrantes, calles, aceras, alumbrado público y servicios, incluyendo su periferia urbana.	Características urbanas y administrativo
Cuba	Localidades con menos de 500 habitantes o que carece de características urbanas definidas. Urbana se define como la localidad de 2.000 habitantes o más y aquella entre 200 y 500 habitantes que cuenta con múltiples servicios (comerciales, de salud, educación, culturales).	Población y características urbanas
Ecuador	Población residente en parroquias rurales tanto en su cabecera como en el resto del territorio. Urbana es la población residente en parroquias urbanas, correspondientes a las cabeceras cantonales.	Administrativo
El Salvador	Población que vive fuera de los límites oficiales de las cabeceras municipales, caracterizada generalmente por un patrón de asentamiento disperso.	Administrativo
Guatemala	Todo territorio que no cumple con los criterios urbanos. Este se aplica a las ciudades, villas, pueblos, colonias o condominios con más de 2.000 habitantes, donde al menos el 51 % de los hogares dispone de electricidad y agua por tubería.	Población y características urbanas
Haití	Territorio no clasificado como urbano. Se consideran urbanas las ciudades, cabeceras de comuna y otras aglomeraciones oficialmente reconocidas con características urbanas.	Administrativo y características urbanas
Honduras	Áreas que no cumplen los criterios urbanos, incluyendo zonas de población dispersa. Por urbano se entiende el centro poblado con 2.000 habitantes o más que cuenta con servicios básicos y al menos uno de los siguientes: electricidad, alcantarillado o centro de salud.	Población y características urbanas
México	Localidades con menos de 2.500 habitantes.	Población
Nicaragua	Localidades con menos de 1.000 habitantes que carecen de una estructura urbanística definida, como calles pavimentadas, electricidad domiciliaria y comercio establecido, entre otros servicios.	Población y características urbanas
Panamá	Territorio que no cumple los criterios urbanos. Se consideran como urbanas las localidades con 1.500 habitantes o más que disponen de un conjunto de servicios e infraestructura básica (electricidad, acueducto, alcantarillado, calles pavimentadas, comercios, medios de comunicación y una escuela de nivel secundario).	Población y características urbanas
Paraguay	Territorio ubicado fuera de las cabeceras distritales, caracterizado por viviendas dispersas, típicamente rodeadas de áreas de cultivo o campo.	Administrativo
Perú	Centros poblados que no alcanzan el umbral urbano. Urbano se define como el centro poblado que concentra 400 viviendas o más en un espacio contiguo.	Viviendas/ Infraestructura
República Dominicana	Población que no reside en las cabeceras de los municipios o distritos municipales.	Administrativo
Uruguay	Territorio que no cumple con los criterios urbanos. Son urbanos los centros poblados con trazado de manzanas, delimitados según servicios básicos, condiciones del terreno y criterios operativos del Instituto Nacional de Estadística (INE).	Características urbanas y otros (criterios operativos)

Fuente: Elaboración propia con base en revisiones de CEDLAS (2025) y CEPAL (2013).

La clasificación de Grado de Urbanización (DEGURBA), que se apoya en criterios poblacionales homogéneos de densidad y contigüidad, mejora la comparabilidad internacional y permite una caracterización más precisa del continuo rural-urbano. Bajo esta metodología, que utiliza parámetros más restrictivos que muchas definiciones nacionales, la población rural de la región se estima en alrededor de 100 millones de personas en 2025, aproximadamente el 15 % del total. Según este criterio, la mitad vive en aldeas rurales (asentamientos pequeños con cierta

densidad), mientras que la otra mitad se encuentra en zonas dispersas o mayormente deshabitadas². A lo largo de este reporte, la caracterización de las condiciones socioeconómicas y demográficas de la población provienen principalmente de fuentes nacionales, como censos y encuestas de hogares, que utilizan las clasificaciones oficiales de cada país. No obstante, cuando la información lo permite, el análisis se complementa también con la clasificación DEGURBA.

Gráfico 1.1
Población total y peso de la población rural en América Latina y el Caribe, décadas 1950-2040



Nota: Los valores de las proyecciones corresponden al punto medio de cada década.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UNDESA (2019).

2 La clasificación DEGURBA distingue tres categorías territoriales: ciudades, pueblos y áreas semidensas, y áreas rurales. Dentro de estas últimas, suele diferenciarse entre aldeas rurales y zonas rurales dispersas o mayormente deshabitadas (Comisión Europea et al., 2024). Para mayor detalle, ver el capítulo 6.

Rezagos del mundo rural en el cumplimiento de los ODS

Las áreas rurales presentan rezagos significativos en múltiples dimensiones del bienestar, desde el acceso a servicios básicos hasta las oportunidades económicas y la calidad del empleo, lo que se refleja en un cumplimiento más lento de varios ODS. El cuadro 1.1 presenta un conjunto de indicadores asociados a distintos ODS que evidencian esta situación.

En prácticamente todos los casos en los que es posible comparar áreas urbanas y rurales, se observa una brecha sistemática en detrimento del ámbito rural. Las brechas son particularmente marcadas en indicadores de calidad de vida básicos: el 69 % de la población urbana tiene acceso a agua potable gestionada de manera segura, mientras que en las áreas rurales esa cifra desciende al 51 % (ODS 6). Solo el 11 % de los hogares rurales cuenta con acceso a servicios básicos de saneamiento, comparado con el 65 % en zonas urbanas (ODS 1). En educación, los estudiantes rurales alcanzan aproximadamente la mitad del nivel de competencia en matemáticas que sus pares urbanos (ODS 4). La informalidad laboral afecta al 67 % del empleo rural, frente al 47 % urbano (ODS 8). El tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado por las mujeres rurales asciende a 27 horas semanales, frente a 23 de las urbanas, siendo las brechas de género en esta dimensión mucho más marcadas en las áreas rurales que en las urbanas (ODS 5). Estas disparidades no solo limitan el bienestar presente de la población rural, sino que también condicionan sus oportunidades futuras y la capacidad de estos territorios para contribuir al desarrollo económico regional³.



Las áreas rurales muestran rezagos en bienestar, acceso a servicios básicos y oportunidades económicas, con avances más lentos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Un aspecto clave que se debe destacar es la limitada disponibilidad de información desagregada para monitorear adecuadamente el avance de muchas metas de los ODS en territorios rurales. La ausencia de datos con suficiente nivel de detalle restringe la capacidad de los gobiernos para diagnosticar rezagos, priorizar intervenciones y diseñar políticas basadas en la evidencia. Una revisión sistemática de los ODS 1 a 8 realizada para este reporte (basada en múltiples fuentes⁴) muestra que una proporción significativa de los indicadores oficiales no cuenta con información desagregada por área rural y urbana, la información no es comparable entre países o, directamente, no se mide en las zonas rurales⁵. Entre las fuentes consultadas, solo el 30 % de los indicadores cuentan efectivamente con información rural-urbana para, en cada caso, más de cinco países de la región en los últimos 10 años. El gráfico 1.2 muestra este resultado para cada ODS.

La falta de información invisibiliza dimensiones clave de la realidad rural y limita la capacidad de monitorear el progreso hacia los ODS, así como el diseño de políticas públicas en general. Fortalecer los sistemas estadísticos para capturar esta dimensión territorial es indispensable para mejorar el seguimiento de las brechas territoriales y orientar respuestas de política más efectivas.

3 Cabe mencionar que algunos estudios que analizan brechas rural-urbanas en el nivel de satisfacción con la vida, medido a partir de encuestas, encuentran resultados contrapuestos para ALC. Por un lado, Valente y Berry (2016) documentan que no existen diferencias significativas entre áreas rurales y urbanas, mientras que, más recientemente, Tassinari et al. (2025) encuentran niveles de satisfacción con la vida más bajos en las zonas rurales que en las semiurbanas y las urbanas.

4 Además de la Bases de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC), las bases del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, se utilizaron datos recabados por varias de sus agencias, entre ellas la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

5 El análisis permitirá identificar 64 indicadores oficiales asociados a las metas de los ODS 1 a 8, que, en principio, podrían medirse con desagregación rural-urbana.

Cuadro 1.1

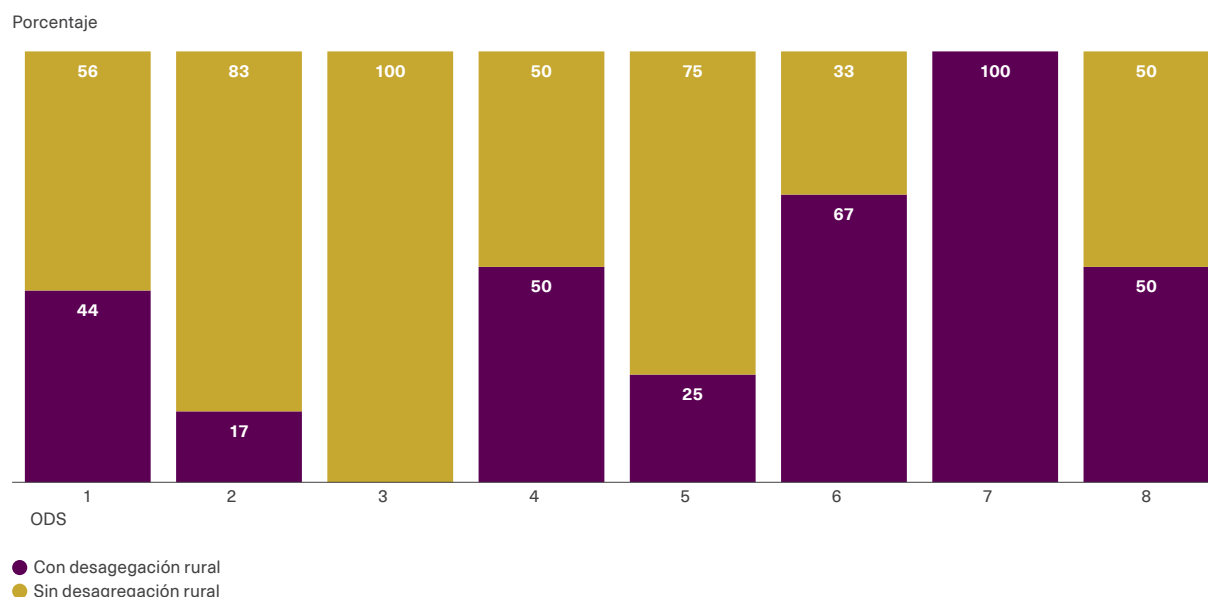
Indicadores vinculados a metas de los ODS por área. Promedio para América Latina y el Caribe

Objetivos	Indicador	N° de países con datos	Rural	Urbano	Año	Fuente
ODS 1 Fin de la pobreza	Proporción de jefes de hogar que reportan vivir en hogares con acceso a servicios básicos de saneamiento	25	11 %	65 %	2024	Naciones Unidas (s. f. a)
ODS 2 Hambre cero	Prevalencia del retraso del crecimiento (talla para la edad) entre los niños menores de 5 años	12	18 %	12 %	Múltiples años	Bancalari et al. (2025)
ODS 3 Salud y bienestar	Tasa de mortalidad en niños (muertes en su primer año de vida por cada 1.000 nacidos vivos)	17	28	21	Múltiples años	Bancalari et al. (2025)
ODS 4 Educación de calidad	Nivel mínimo de competencia en matemáticas alcanzado en la enseñanza secundaria inferior (ratio)	16	0,52*		2019	Naciones Unidas (s. f. a)
ODS 5 Igualdad de género	Tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, por sexo (horas semanales)	9	Hombres: 7 Mujeres: 27	Hombres: 8 Mujeres: 23	2018	CEDLAS (2025)
ODS 6 Agua limpia y saneamiento	Proporción de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura	13	51 %	69 %	2024	Naciones Unidas (s. f. a)
ODS 7 Energía asequible y no contaminante	Proporción de jefes de hogar que reportan vivir en hogares con acceso a servicios básicos de electricidad	14	96 %	100 %	2023	CEDLAS (2025)
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico	Proporción del empleo informal en el empleo total	14	67 %	47 %	2023	CEDLAS (2025)
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura	Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable durante todo el año	33	66 %		2025	Buccari et al. (2025)
ODS 10 Reducción de las desigualdades	Proporción de personas que viven por debajo del 50 % del ingreso medio	11	35 %	14 %	2022	CEPAL (s. f. b)
ODS 12 Producción y consumo responsables	Consumo interno de combustibles fósiles per cápita (millones de toneladas)	36		30**	2023	Naciones Unidas (s. f. a)
ODS 13 Acción por el clima	Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por parte del sector agropecuario (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente [MtCO ₂ e])	33		35**	2022	CEPAL (s. f. a, tomado de WRI)
ODS 14 Vida submarina	Pesca sostenible como proporción del PIB	21		0,23 %**	2021	Naciones Unidas (s. f. a)
ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres	Proporción de tierra degradada sobre la superficie total de tierra	22		17 %**	2019	Naciones Unidas (s. f. a)
ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas	Mujeres que han experimentado violencia sexual alguna vez por parte de su última pareja, como porcentaje de las mujeres de 15 a 49 años	6	5,0 %	5,6 %	Múltiples años	CEDLAS (2025)
ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos	Proporción de jefes de hogar que reportan utilizar internet	13	50 %	77 %	2023	CEDLAS (2025)

Nota: El ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) se enfoca principalmente en dimensiones asociadas a la urbanización, por lo que no se incluye en la lista. Algunos de los indicadores utilizados constituyen aproximaciones de las metas establecidas en los ODS. * El indicador del objetivo 4 se expresa como un ratio. Un valor de 1 indica paridad entre áreas; un valor menor que 1 indica que el área rural está en desventaja.** Los objetivos 12 a 15, relacionados con la sostenibilidad y acción climática, son de alta relevancia para las áreas rurales. Por su naturaleza, son difícilmente asignables a un ámbito geográfico específico.

Gráfico 1.2

Indicadores de seguimiento de los ODS con información disponible en ámbitos rurales potencialmente medibles en países de América Latina y el Caribe



Nota: Se incluyen el ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 2 (Hambre cero), ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 4 (Educación de calidad), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). Dentro de estos objetivos, se identificaron 64 indicadores oficiales con posible desagregación territorial, de los cuales 46 no tienen publicada información con desagregación territorial, aunque podrían medirse porque existen datos. El número total de indicadores (64) se distribuye de la siguiente manera: ODS 1 (9), ODS 2 (6), ODS 3 (24), ODS 4 (8), ODS 5 (4), ODS 6 (3), ODS 7 (2) y ODS 8 (8).

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de indicadores de seguimiento de los ODS de múltiples organismos (ver notas 4 y 5 a pie de página).

Pobreza rural: evolución y características

Entre todos los indicadores que muestran rezagos en la región, el de pobreza es quizás el que más sintetiza las limitaciones que enfrentan los territorios rurales y para el que se dispone de más información desagregada. Las áreas rurales de ALC concentran una cantidad desproporcionada de población en situación de pobreza. En 14 países de la región, alrededor del 40 % de todas las personas que vivían por debajo de la línea

internacional de pobreza (USD 6,85 diarios en paridad de poder adquisitivo [PPA] de 2017) residían en áreas rurales en 2023. Esa proporción se eleva al 54 % cuando se considera a quienes se encuentran en pobreza extrema (USD 2,15 diarios en PPA de 2017)⁶.

Más allá de la concentración de pobres en términos absolutos, la incidencia de la pobreza es también

⁶ Estos datos provienen de encuestas de hogares de la base CEDLAS (2025). Los países incluidos son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Esta base contiene una medida armonizada del ingreso total del hogar, que se construye incorporando ingresos de diversas fuentes (laborales y no laborales), tanto monetarios (como salarios, ganancias del trabajo cuentapropista, de capital u otras transferencias) y no monetarios (entre ellos, el valor de la producción destinada al autoconsumo y las remuneraciones en especie; por ejemplo, alimentos, vivienda o servicios provistos por el empleador). Así mismo, los ingresos se ajustan para contemplar las diferencias en costos de vida en áreas rurales y urbanas. Para mayor detalle, ver el capítulo 7.

significativamente mayor en el mundo rural. En 2023, el 34 % de la población rural vivía en situación de pobreza, el doble que el 17 % observado en áreas urbanas (panel A del gráfico 1.3). Esta brecha persistente revela que, incluso cuando las economías crecen y la pobreza agregada disminuye, los territorios rurales quedan sistemáticamente rezagados.

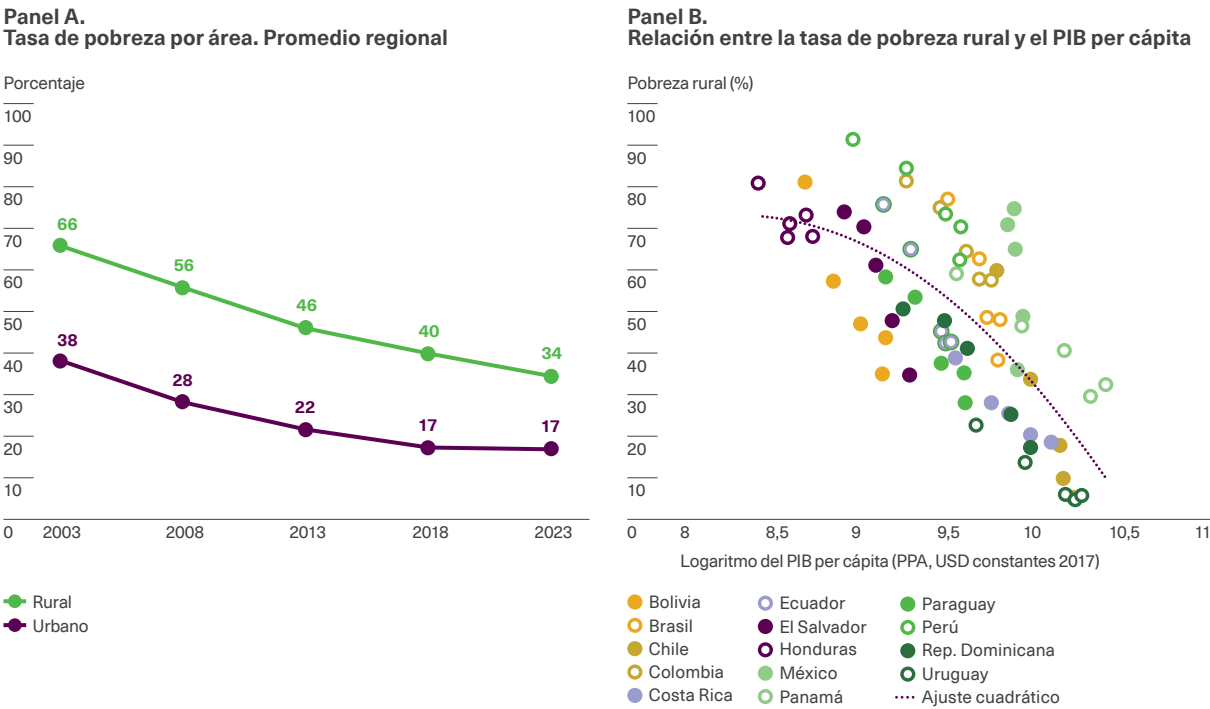
En las últimas dos décadas se han registrado avances importantes. La incidencia de la pobreza rural se redujo del 66 % al 34 % entre 2003 y 2023. Las mejoras en el bienestar de los hogares rurales ocurrieron a la

par que las economías crecían y cambiaba la estructura productiva. El panel B del gráfico 1.3 muestra, en efecto, una fuerte asociación negativa entre el PIB per cápita de los países y la tasa de pobreza rural.

● ●

En 2023, el 34 % de la población rural vivía en situación de pobreza, el doble que el 17 % observado en las áreas urbanas

Gráfico 1.3
Pobreza rural en América Latina y el Caribe, 2003-2023



Nota: La pobreza se define como el porcentaje de población en hogares con ingresos por debajo de un umbral de USD 6,85 a PPA por persona y día. Cada punto del panel B representa un país y año. Los años considerados son 2003, 2008, 2013, 2018 y 2023.

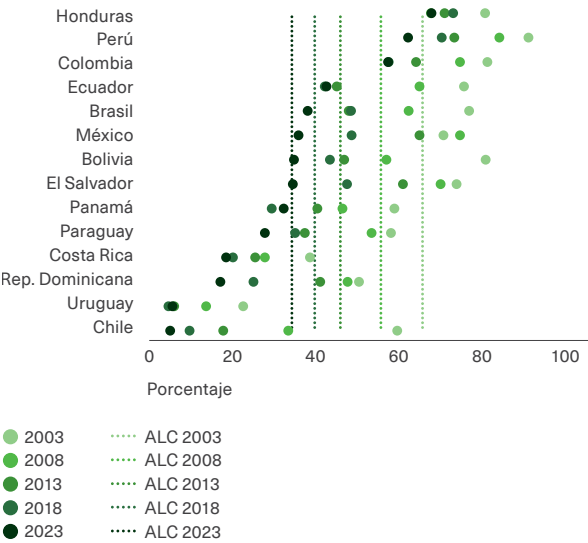
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025) y Banco Mundial (2025h).

La reducción de la pobreza y de la pobreza extrema rural en el período 2003-2023 se observó en todos los países (ver el gráfico 1.4)⁷. En general, el ordenamiento de países según el nivel de pobreza rural se mantuvo, con Uruguay y Costa Rica con los valores más reducidos y Perú y Colombia entre los más elevados. Chile y Bolivia destacan con reducciones muy pronunciadas en los niveles de pobreza rural.

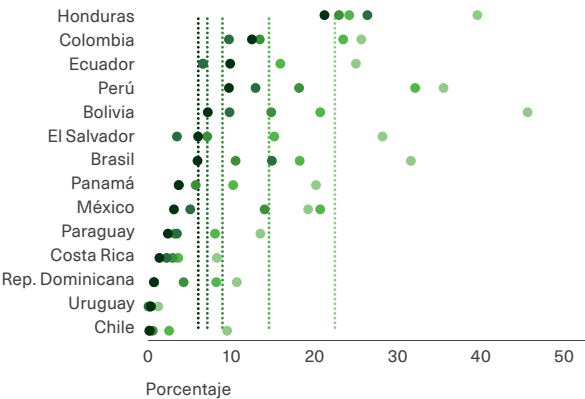
Las tasas de pobreza rural muestran patrones claros por edad, género, educación y etnia, que se sostienen en el tiempo, como muestra el gráfico 1.5. Por un lado, la incidencia de la pobreza se reduce con la edad (panel A), es prácticamente igual para las mujeres que para los hombres (panel B), se reduce con el nivel educativo del jefe de hogar (panel C) y es mayor para indígenas y afrodescendientes (panel D)⁸.

Gráfico 1.4
Incidencia de la pobreza en hogares rurales en países de América Latina y el Caribe, 2003-2023

Panel A.
Tasa de pobreza rural



Panel B.
Tasa de pobreza extrema



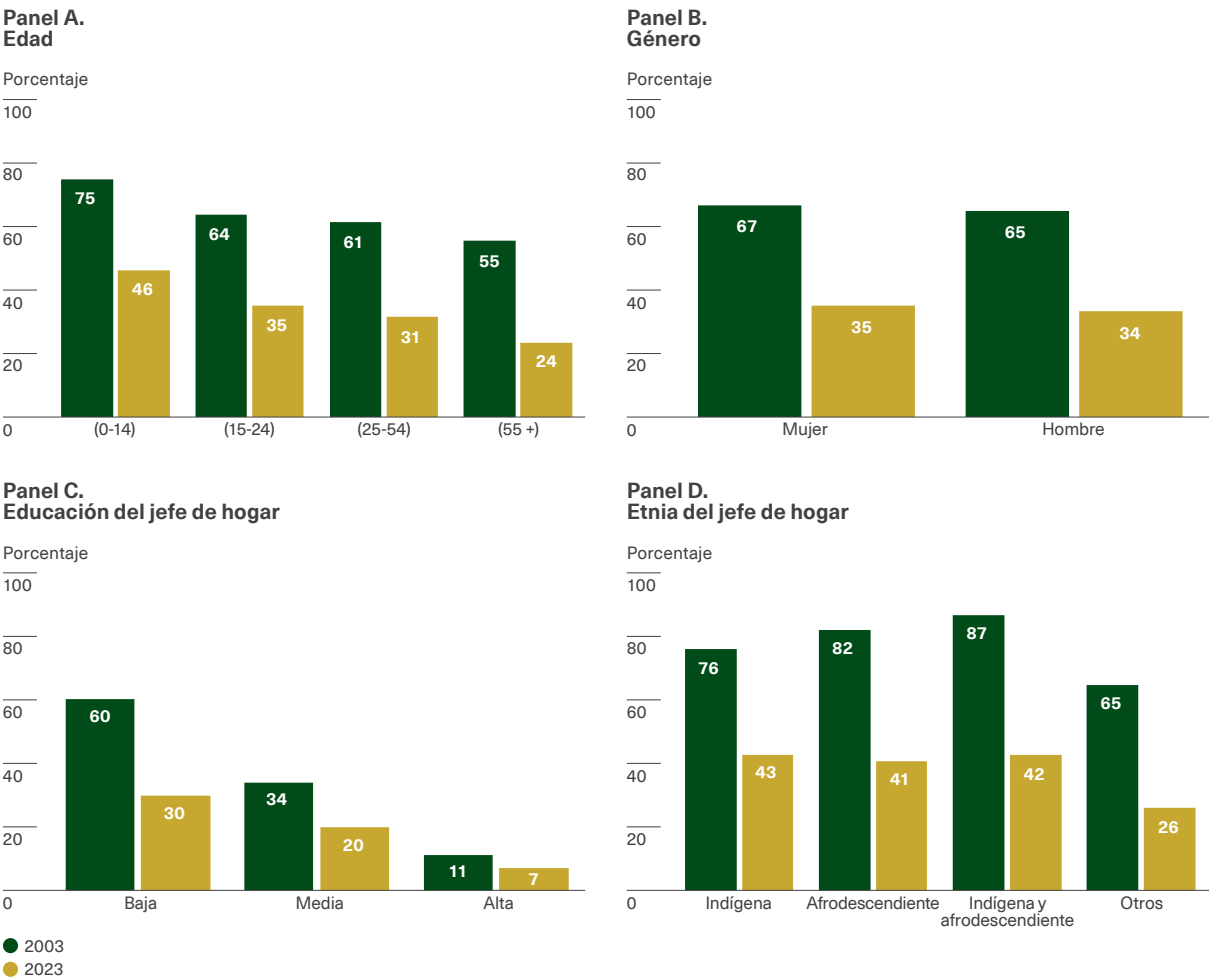
Nota: La pobreza (extrema) se define como el porcentaje de población en hogares con ingresos por debajo de un umbral de USD 6,85 (USD 2,15) a PPA por persona y día.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

7 Haití y Venezuela son posiblemente las únicas excepciones a la tendencia general de reducción de la pobreza en la región en las últimas décadas, pero no se cuenta con estadísticas oficiales para estos países.
8 Estos patrones suelen ser similares dentro de cada uno de los países, como se muestra en el gráfico A.1.1 del apéndice, disponible en la edición en línea de este RED.



Cosecha mecanizada de café en Brasil.

Gráfico 1.5
 Pobreza rural por edad, género, educación y etnia. Promedio de América Latina y el Caribe, 2003 y 2023



Nota: La pobreza se define como el porcentaje de población en hogares con ingresos por debajo de un umbral de USD 6,85 a PPA por persona y día. La educación baja se refiere a personas que no han completado el nivel secundario; educación media, a aquellas con nivel secundario completo o superior incompleto; educación alta, a las que tienen superior completo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

El cambio estructural en América Latina y el Caribe

A partir de mediados del siglo XX, la región atravesó un proceso sostenido de urbanización que, como se ha mencionado anteriormente, redujo de manera significativa el peso de la población rural. En ese

contexto, más del 50 % del empleo total de ALC y casi todo el empleo rural se concentraba en el sector agropecuario, que aportaba alrededor del 12 % del valor agregado regional. A medida que avanzó el desarrollo

económico, esta transformación demográfica fue acompañada por un cambio simultáneo en la estructura productiva, con una reducción progresiva del peso relativo del agro en el empleo y la producción.

El desplazamiento desde sectores de baja productividad, como la agricultura tradicional, hacia sectores de mayor productividad, como la industria y los servicios modernos, es lo que se conoce como cambio estructural, una de las características principales del crecimiento económico (Duarte y Restuccia, 2010, 2020; Herrendorf et al., 2014; Kuznets, 1973). El gráfico 1.6 muestra este fenómeno en ALC, describiendo la evolución en la participación del empleo y del valor agregado de tres sectores según la clasificación estándar (agropecuario, industria y servicios) para el promedio de nueve países de la región entre 1950 y 2010. En él se observa una marcada caída en la proporción del empleo en el agro y una leve disminución en la proporción de su aporte al valor agregado. En

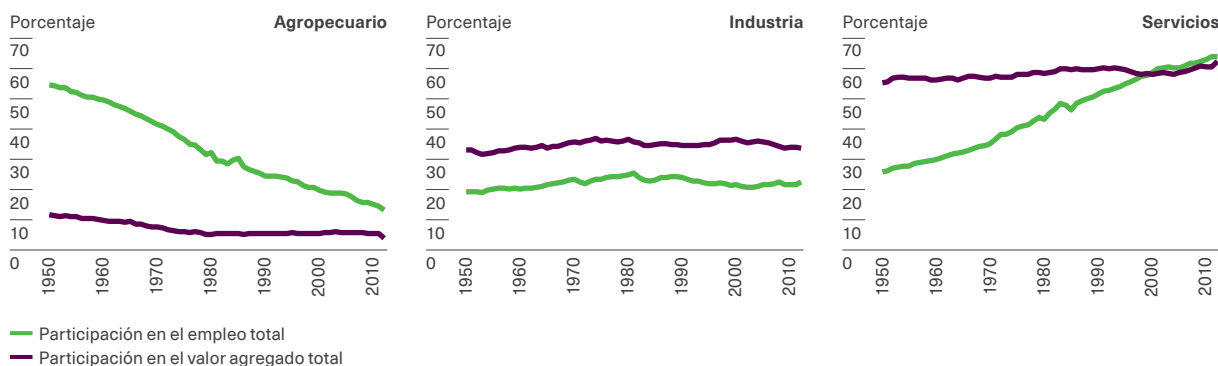
contraste con la experiencia histórica de los países desarrollados, buena parte de la reasignación laboral en ALC se produjo directamente desde la agricultura hacia los servicios, con un rol menos protagónico de la manufactura en las etapas intermedias del desarrollo. Además, aunque la participación de la agricultura en el valor agregado y el empleo ha disminuido de forma significativa, el sector sigue mostrando aportes en ambas dimensiones superiores a los observados en los países desarrollados⁹.

● ●

Aunque la participación de la agricultura en el valor agregado y el empleo ha disminuido de forma significativa, el sector sigue mostrando aportes en ambas dimensiones superiores a los observados en los países desarrollados

Gráfico 1.6

Evolución de la participación del empleo y el valor agregado por sector en América Latina y el Caribe, 1950-2010



Nota: Los datos incluyen valores del nivel de empleo y valor agregado en la moneda nacional de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Venezuela. Las cifras de valor agregado son deflactados a dólares de 2005, utilizando la base de los Indicadores del Desarrollo Mundial (Banco Mundial).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Timmer et al. (2015) y Kruse et al. (2023).

9 Como ejemplo, en 2010, en Estados Unidos, la agricultura representó el 1,5 % del empleo y 1,2 % del valor agregado, mientras que los servicios representaron el 83,9 % del empleo y el 80,9 % del valor agregado.

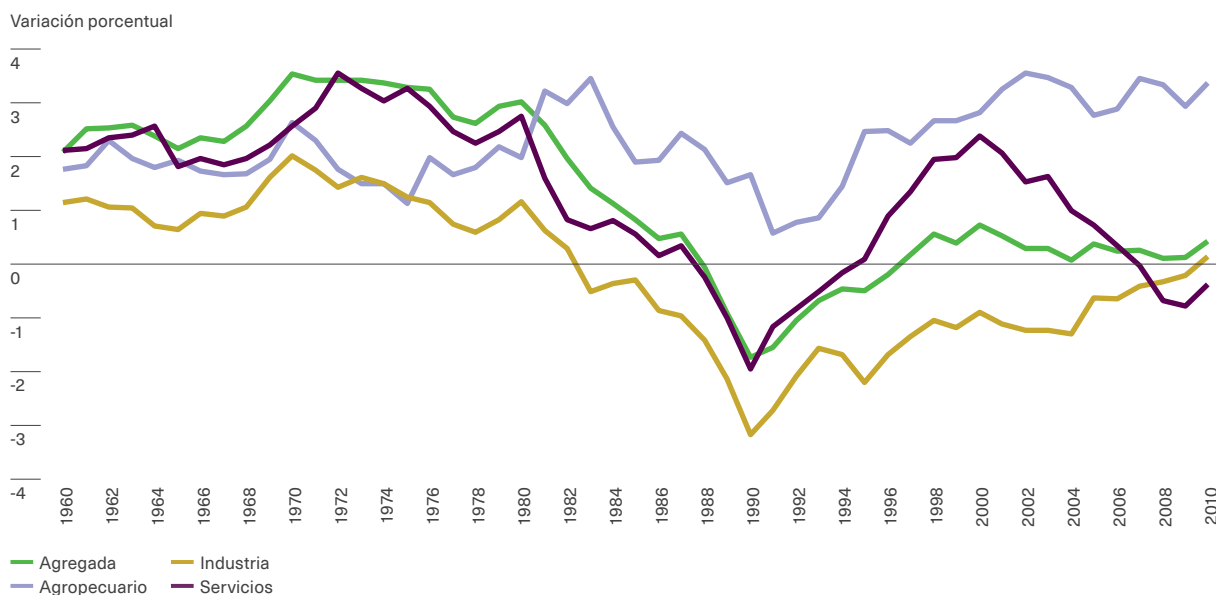
Durante ese proceso de cambio estructural, las economías de ALC transitaron por una época de moderado crecimiento en su productividad. El gráfico 1.7 presenta el promedio móvil en la tasa de cambio de la productividad del trabajo desde 1960 tanto a nivel agregado como por sector. A nivel agregado se observa un primer período donde las tasas de crecimiento de la productividad fueron sistemáticamente positivas. Este período finaliza en los años ochenta, cuando se observa una desaceleración progresiva, llegando a tasas de crecimiento negativas. A partir de los años noventa la tasa de crecimiento de la productividad laboral para la economía se mantuvo prácticamente nula en el período de análisis. A nivel sectorial se observa también el primer período de crecimiento sostenido. El descenso de la productividad agregada observada desde los años ochenta y el estancamiento posterior se explican por una caída sostenida de

la productividad en la industria y en los servicios, mientras que el sector agropecuario muestra tasas positivas de crecimiento de la productividad durante todo el período analizado.

Una reasignación de trabajadores hacia sectores con baja productividad, como ocurre con la expansión de servicios informales, puede tener efectos negativos en el crecimiento agregado (Rodrik, 2016). Cuando es exitoso, el cambio estructural permite aumentar la calidad del empleo, reducir las desigualdades, diversificar la matriz exportadora y fortalecer la resiliencia frente a choques externos. A través de este proceso, los países pueden abandonar la dependencia de sectores de bajo valor agregado y avanzar hacia economías más complejas y con mayor contenido tecnológico (Hausman et al., 2007).

Gráfico 1.7

Tasa de cambio de la productividad del trabajo en América Latina y el Caribe, 1960-2010



Nota: Los datos incluyen valores para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Venezuela. Las líneas representan el promedio móvil de 10 años en la tasa de crecimiento de la productividad.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Timmer et al. (2015).

Como ya se ha señalado, el sector agropecuario ha perdido peso relativo en la economía, pero esto es un paso esperado, producto de la modernización de este sector y del consecuente cambio estructural. Como puede observarse en el gráfico 1.7 el sector agropecuario es cada vez más un sector dinámico en términos de crecimiento de la productividad, aunque todavía queda un amplio margen para seguir incrementando su producción de forma sostenible. No obstante, dado su peso actual en

la estructura productiva, difícilmente puede constituirse por sí solo en el motor del desarrollo económico de ALC. En este contexto, resulta clave desarrollar también los sectores primarios no agropecuarios, fortalecer las cadenas de valor de todos los sectores primarios, así como los encadenamientos con la industria y los servicios conexos. Estas estrategias pueden contribuir al desarrollo de las áreas rurales y constituir un factor relevante para reducir los rezagos de bienestar.

Oportunidades y desafíos en los sectores productivos rurales

Desde una perspectiva productiva, los territorios rurales constituyen una fuente importante de bienes y servicios estratégicos para ALC. En ellos se concentra el sector agropecuario, pero también una amplia gama de

actividades vinculadas a la transición energética y ambiental, junto con sectores intensivos en empleo local, que permiten diversificar las fuentes de ingresos de los hogares rurales y fortalecer su resiliencia económica.

Sector agropecuario

Potencial productivo y dotación de recursos naturales

ALC dispone de una dotación de recursos naturales favorable para las actividades agropecuarias, que no siempre logra aprovechar plenamente. Si bien esta caracterización oculta diferencias significativas entre países y dentro de cada uno, la evidencia indica que el sector aún presenta márgenes importantes para elevar su productividad. En la actualidad conviven, por un lado, un segmento agropecuario dinámico y competitivo a escala global, que ha sabido capitalizar buena parte de las ventajas naturales de la región, y, por otro, un sector más tradicional, caracterizado por niveles de productividad media y baja.

El valor agregado promedio por trabajador se mantiene muy por debajo del observado en países de altos ingresos (gráfico 1.8). Estas brechas de productividad

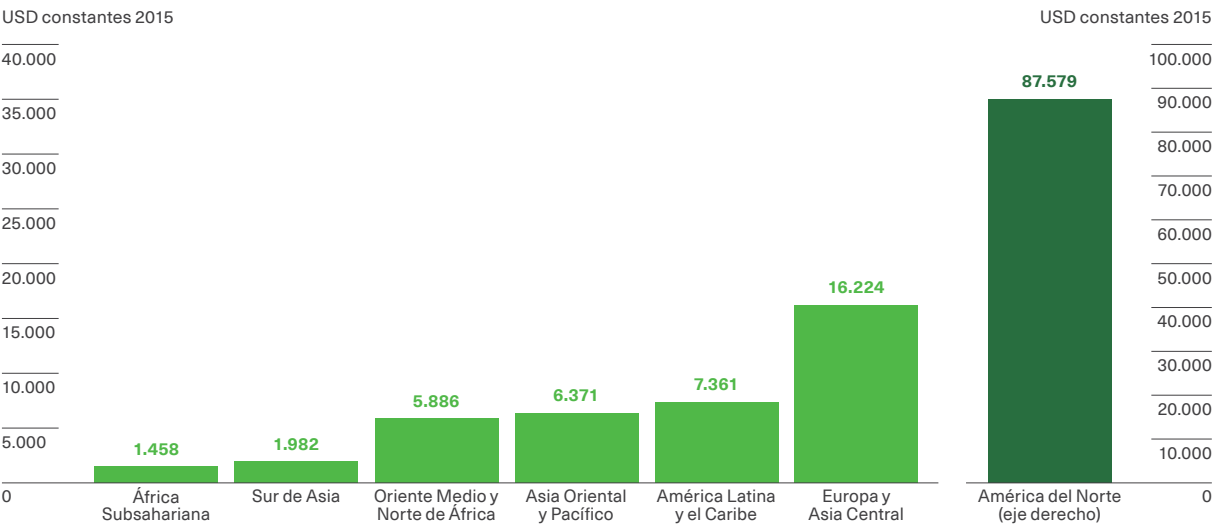
pueden atribuirse tanto a menores dotaciones por trabajador de otros factores de la producción (por ejemplo, tierra y capital) y a un uso más limitado de insumos intermedios como a diferencias en la eficiencia con la que estos factores se combinan¹⁰. Estimaciones realizadas para este reporte, basadas en datos satelitales y modelos agronómicos, sugieren que la brecha de productividad por unidad de tierra respecto de los países desarrollados podría cerrarse o incluso transformarse en un superávit mediante mejoras en las prácticas agrícolas, un uso más eficiente de los insumos y la reasignación de cultivos (Adamopoulos, 2025).



ALC dispone de una dotación de recursos naturales favorable para las actividades agropecuarias, que no siempre logra aprovechar plenamente

¹⁰ La eficiencia con la que se combinan los factores captura efectos de diversa índole: progreso tecnológico, innovación, organización del trabajo, infraestructura, calidad institucional, escala de operación y asignación de recursos entre unidades productivas.

Gráfico 1.8
 Valor agregado por trabajador en el sector agropecuario por región, 2023



Nota: El valor agregado por trabajador se expresa en dólares estadounidenses de 2015. Los valores para América del Norte se expresan en el eje derecho y los del resto de las regiones en el eje izquierdo. El sector agropecuario comprende los subsectores agrícola, forestal y pesquero.

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial (s. f.).

La modernización productiva del agro puede inducir desajustes en los mercados laborales locales que la política pública debe anticipar y acompañar para asegurar que las ganancias de productividad se traduzcan en mejoras más amplias en los territorios rurales¹¹. Entre los mecanismos que permiten amplificar estos efectos y contribuir al bienestar de los hogares rurales, se destaca la inversión en infraestructura, en particular en conectividad vial, logística y digital. La mejora de los caminos rurales facilita el acceso a mercados y servicios básicos y amplía las oportunidades de movilidad laboral (Costinot y Donaldson, 2016; Sotelo, 2020). A su vez, la conectividad digital fortalece el desarrollo de actividades rurales no agrícolas, especialmente en el sector de servicios, permitiendo que el empleo que se desplaza fuera del agro lo haga hacia ocupaciones de mayor productividad y formalidad.

Cadenas de valor agroalimentarias y encadenamientos productivos

Las cadenas de valor agroalimentarias constituyen un factor clave para amplificar el impacto del sector sobre el desarrollo rural y de las economías en general (Barrett et al., 2022). A medida que los países se desarrollan, una proporción creciente del valor, el empleo y los ingresos se genera en las etapas de procesamiento, logística, almacenamiento, distribución y comercialización (Davis et al., 2023; Hazell et al., 2024). Estos encadenamientos pueden aumentar la productividad, atraer inversión, mejorar la calidad y trazabilidad de los alimentos y generar exportaciones de mayor valor agregado, al tiempo que podrían contribuir a dinamizar las economías rurales y facilitar el acceso de los consumidores a alimentos de mejor calidad, mayor variedad y menor costo (FAO, 2021c).

11 Un estudio sobre Brasil ilustra los efectos heterogéneos del cambio tecnológico. Si bien tanto la incorporación de la soja transgénica como la introducción de una segunda cosecha de maíz aumentaron la productividad agrícola en las zonas de mayor potencial, sus efectos sobre el empleo fueron distintos: la expansión de la soja redujo la demanda de trabajo agrícola y presionó a la baja los salarios industriales, mientras que la segunda cosecha de maíz incrementó el empleo en el agro, redujo el empleo industrial y elevó los salarios (Bustos et al., 2016).

La inversión extranjera directa ha sido dominante en la transformación de los sistemas agroalimentarios de la región, impulsando la expansión de supermercados y los servicios alimentarios, pero con una alta concentración. En 2018, las cadenas internacionales tenían una participación en las ventas de alimentos en supermercados del 56 % (Barrett et al., 2022). Por lo tanto, para que las oportunidades de las cadenas de valor agroalimentario se traduzcan en impactos locales, se requiere que estas se articulen con los segmentos rurales y proveedores nacionales, incluyendo pequeños productores¹².

Inserción internacional y diferenciación de productos

El sector agropecuario cumple también un rol central en la inserción internacional de ALC (Morris et al., 2020). En las últimas décadas, la región se consolidó como exportadora neta de alimentos, con un superávit comercial elevado y creciente (panel A del gráfico 1.9). En 2023, los productos agropecuarios y agroindustriales representaron el 22 % de las exportaciones de ALC, frente a apenas un 8 % a nivel mundial (UNCTAD, 2025b). En este contexto, el crecimiento proyectado de la población mundial y los cambios en los patrones de consumo refuerzan las oportunidades para consolidar el rol de la región como proveedora de alimentos al mundo. No obstante, estas cifras reflejan principalmente la estructura exportadora de la mayoría de los países de América Latina, mientras que en el Caribe y algunos países de Centroamérica predomina una posición de importadores netos (panel B del gráfico 1.9). Para caribeños y centroamericanos, el fortalecimiento de las políticas de integración comercial regional ofrece un canal para generar beneficios mutuos, mejorando su acceso a alimentos y su seguridad alimentaria (recuadro 1.2).



La región se consolidó como exportadora neta de alimentos, con un peso de las exportaciones agropecuarias muy superior al promedio mundial

En los países desarrollados, se observa una transición hacia dietas más sostenibles, con una creciente demanda de alimentos diferenciados, respaldada por estándares ambientales y sociales cada vez más estrictos¹³. Esto crea oportunidades significativas para la región, aunque también requiere adaptaciones profundas en los sistemas productivos.

En este contexto, la diferenciación de productos se vuelve clave tanto para aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales como para superar un problema histórico de la región: su exposición estructural a la volatilidad de los precios de los bienes primarios (Ocampo, 2017). Ejemplos como el café de Colombia o la carne de Uruguay demuestran que la adopción de estándares de calidad, trazabilidad y certificación puede estabilizar los ingresos, mejorar el posicionamiento internacional y abrir acceso a mercados de mayor valor (Karl y Baethgen, 2025; Parente-Laverde, 2020).



La demanda internacional de alimentos diferenciados abre oportunidades para ALC, pero exige profundas adaptaciones productivas

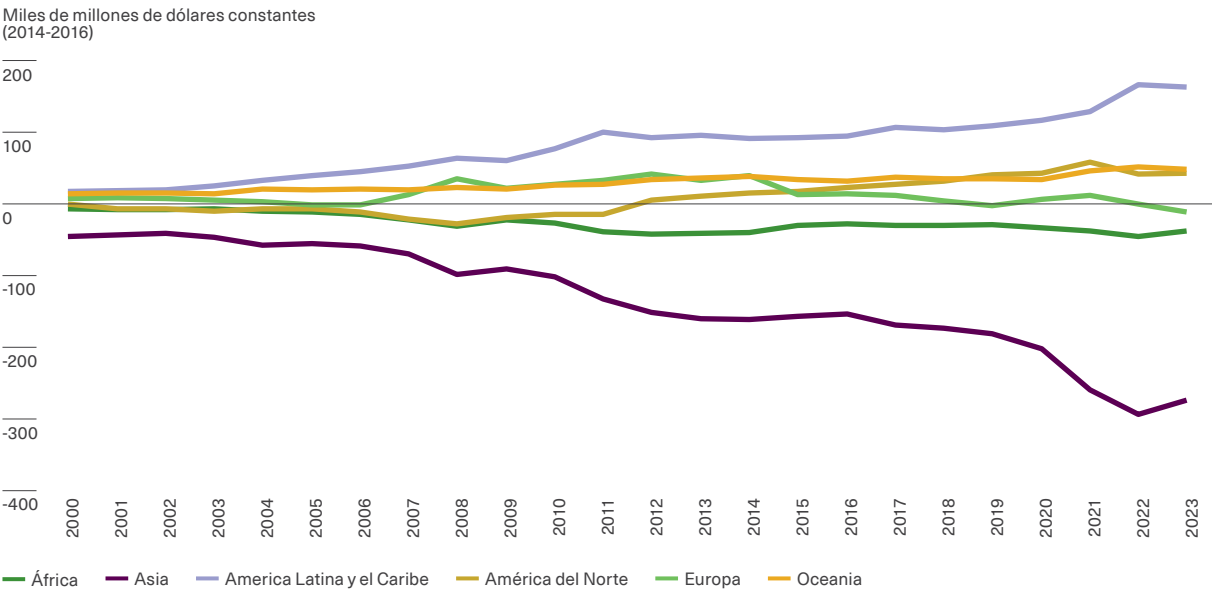
12 Si bien la evidencia es mixta, existen experiencias exitosas cuando se combinan contratos agrícolas bien diseñados con asistencia técnica, acceso al financiamiento y mecanismos que reducen los altos costos de cumplimiento asociados a los estándares de calidad y trazabilidad (Barrett et al., 2022). En particular, los pequeños productores pueden tener ventajas comparativas en ciertos cultivos intensivos en mano de obra o diferenciados, que les permiten insertarse competitivamente en nichos de mercado.

13 Pueden implicar requisitos de certificación orgánica, libre de deforestación, bienestar animal, comercio justo, trazabilidad completa, huella hídrica o de carbono, entre otras.

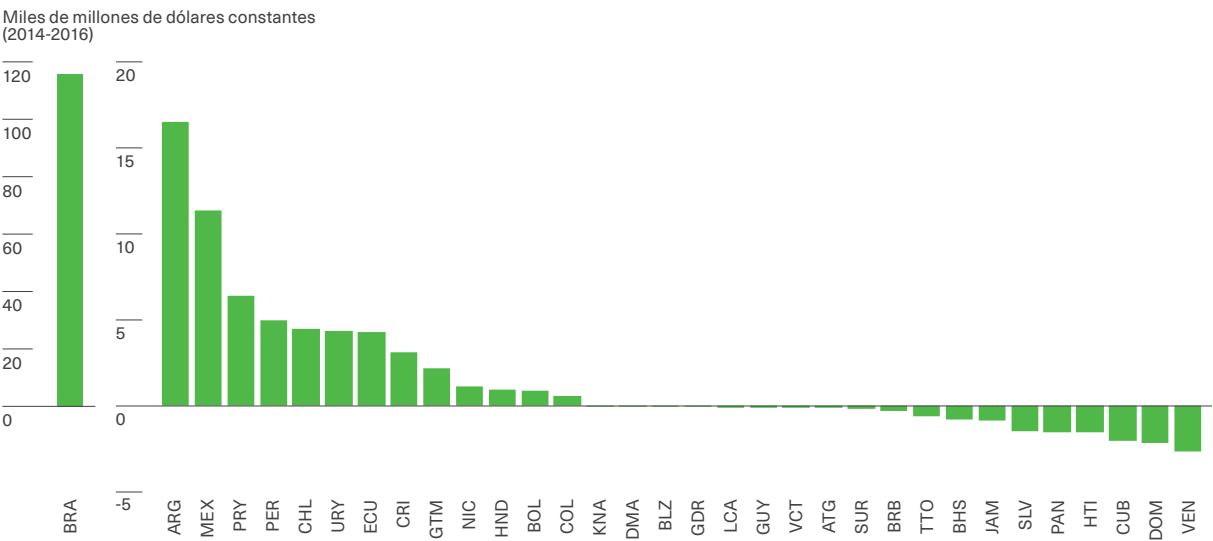
Gráfico 1.9

Exportaciones netas de alimentos

Panel A.
Por regiones, 2000-2023



Panel B.
Por país, 2023



Nota: Las barras del panel B representan exportaciones menos importaciones de alimentos excluyendo productos de la pesca y la acuicultura. Brasil se muestra por separado por claridad visual.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO (2024a).

Recuadro 1.2

Integración regional y seguridad alimentaria: el caso de la Comunidad del Caribe (CARICOM)

La seguridad alimentaria se ha consolidado como una prioridad estratégica en la agenda de integración regional de la Comunidad del Caribe (Caricom). Según estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2025) cerca de 3 millones de personas, cercano al 17 % de la población de la Caricom, enfrentan problemas moderados o severos de seguridad alimentaria. Con excepción de Belice y Guyana, la mayoría de los Estados miembros son importadores netos de alimentos, con países donde más del 80 % del consumo alimentario proviene de importaciones. Esta alta dependencia externa se combina con altos costos de acceso a dietas saludables^a. En promedio, el Caribe presenta los mayores costos a nivel mundial, con unos valores un 42 % superiores a los observados en América del Norte, la región donde se dan los más bajos.

En este contexto, el Tratado de Chaguaramas, que establece la Comunidad del Caribe, su Mercado Único y su integración económica, incorpora una política agropecuaria orientada a promover la productividad, la competitividad y el comercio intrarregional de alimentos, como instrumentos para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional. Sobre esta base, en 2022 se lanzó, junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el programa “Visión 25 % al 2025 del Caricom”, extendido posteriormente hasta 2030, con el objetivo de reducir en un 25 % el costo de las importaciones de alimentos mediante el impulso a la producción local y al comercio intrarregional. La iniciativa incluye acciones como la reducción de barreras comerciales, el fortalecimiento de la producción agroindustrial y mejoras en el acceso a seguros para el transporte de bienes agrícolas. Entre 2022 y fines de 2024, el programa contribuyó a un aumento del 24 % de la producción alimentaria regional (Caricom, 2025; IICA, s. f.).

No obstante, persiste un amplio margen para profundizar el comercio agroalimentario intrarregional. El Caribe continúa enfrentando un entorno altamente restrictivo, caracterizado por aranceles agrícolas elevados, con promedios cercanos al 20 % en la mayoría de los países, o incluso más altos en algunos casos, y significativamente superiores a los aplicados a bienes no agropecuarios. Estas tarifas aduaneras son también mayores que el arancel de nación más favorecida promedio para los productos agropecuarios de ALC, el cual alcanzó el 14 % en 2023 (CEPAL, 2024a).

A esas barreras se suman limitaciones estructurales, como la escasa conectividad marítima, los altos costos de flete y las debilidades en infraestructura logística, así como costos asociados a medidas no arancelarias (en particular, el cumplimiento de requisitos sanitarios, fitosanitarios y técnicos), que, a nivel global, equivalen, en promedio, a un arancel del 17 % para los productos agroalimentarios (CEPAL, 2024a).

Finalmente, las debilidades en materia de facilitación del comercio, incluyendo la falta de armonización de normas, procedimientos aduaneros, certificaciones y controles, incrementan los costos de transacción y los tiempos de despacho. Eso limita los flujos del comercio intrarregional, incluso en ausencia de barreras arancelarias y no arancelarias elevadas (Sanguinetti et al., 2021).

^a La FAO define una dieta saludable como aquella que proporciona no solo las calorías adecuadas, sino también niveles apropiados de todos los nutrientes esenciales y grupos de alimentos necesarios para una vida activa y saludable.

En esta estrategia de diferenciación, los alimentos autóctonos pueden ocupar un nicho particular, con productos notorios que comenzaron a comercializarse de forma masiva en los últimos 25 años, como el açai, la quinoa o la chía. Estos combinan atributos valorados en los mercados internacionales, como beneficios nutricionales, resiliencia frente al cambio climático y contribución a la conservación de la biodiversidad agrícola, al mantener variedades locales que podrían perderse frente a sistemas agrícolas homogéneos, basados en la estandarización de cultivos y variedades. Además, pueden integrarse a esquemas de certificación y trazabilidad que faciliten su acceso a segmentos de mayor valor. Estudios recientes destacan que los recursos genéticos vegetales tradicionales y el mantenimiento de la diversidad de los cultivos son fundamentales para la agricultura sostenible, el acceso a micronutrientes, la resiliencia frente al cambio climático y la proliferación de plagas (Cadena-Zamudio et al., 2024; Goud et al., 2023).

Producción agropecuaria sostenible

Las oportunidades de expansión y aumento de la productividad del sector agropecuario pueden generar presiones sobre los recursos naturales y las emisiones, en un contexto en el que el agro es uno de los principales responsables de las emisiones de GEI en ALC¹⁴. Sin embargo, la adopción de prácticas sostenibles no debe entenderse como un objetivo contrapuesto a la productividad: en muchos casos, estas prácticas son también las más eficientes y contribuyen a fortalecer la resiliencia del sector frente al cambio climático, permitiendo sostener los rendimientos en el tiempo.



Acción CAF.
Escanea este QR para conocer sobre la Estrategia de Prosperidad Agropecuaria de CAF.



La adopción de prácticas sostenibles no debe entenderse como un objetivo contrapuesto a la productividad: en muchos casos, estas prácticas son también las más eficientes y contribuyen a fortalecer la resiliencia del sector frente al cambio climático

A nivel global, estudios recientes sugieren una desaceleración en la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores en la agricultura, en parte como consecuencia del cambio climático. El aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, así como los cambios graduales en temperatura y disponibilidad hídrica, están comenzando a erosionar los avances logrados en eficiencia productiva en diferentes regiones. En este contexto, la adopción de prácticas más sostenibles permite disminuir vulnerabilidades, reducir pérdidas y aumentar la resiliencia del sector.

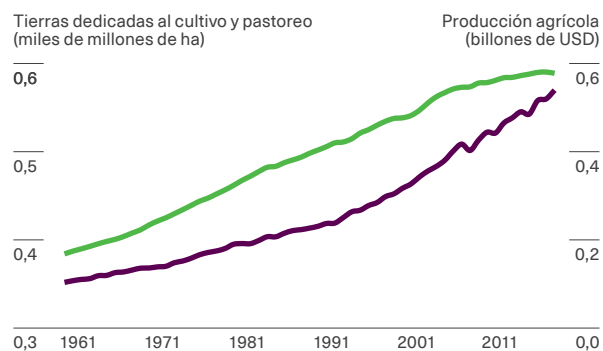
La expansión de la frontera agrícola, en general hacia tierras menos productivas, es el principal desafío para la sostenibilidad del sector agropecuario, debido a su estrecha vinculación con la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero (Brassiolo et al., 2023). De ahí la importancia de que el aumento en la producción agropecuaria en ALC provenga de mejoras en la productividad. El gráfico 1.10 muestra que, entre 1960 y 2020, América del Norte, Europa y Oceanía lograron aumentar significativamente el valor de su producción agrícola mientras reducían el área destinada al cultivo, como consecuencia de la modernización de sus sistemas agropecuarios, incluyendo el uso de semillas mejoradas y cultivos resistentes, la mecanización, la agricultura de precisión y mejoras en el uso de fertilizantes y riego (FAO, 2020b). En ese mismo período, el aumento del valor de la producción en ALC estuvo acompañado, en cambio, por una expansión del área dedicada a la agricultura.

14 Casi el 60 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de la región provienen de la agricultura, el uso del suelo y los cambios en el uso del suelo. Estos últimos se explican en gran medida por la deforestación causada por la expansión de la frontera agrícola (Brassiolo et al., 2023). A esto se suman otros problemas críticos, como la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación de los suelos y aguas y la degradación de los ecosistemas, que reducen los servicios ambientales y afectan tanto la productividad como el bienestar de las poblaciones rurales.

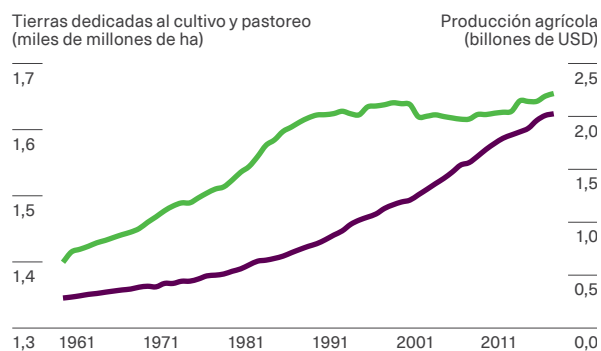
Gráfico 1.10

Evolución del valor de la producción agrícola y de las tierras dedicadas a la producción agrícola por región, 1960-2020

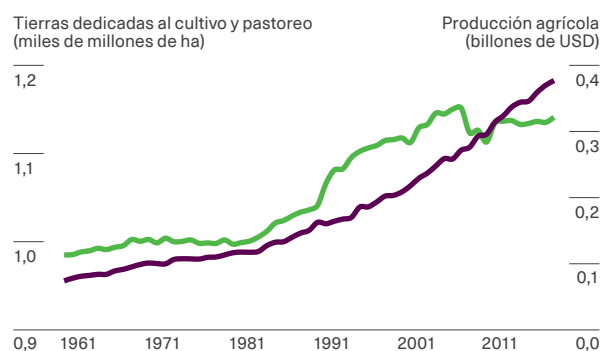
América Latina y el Caribe



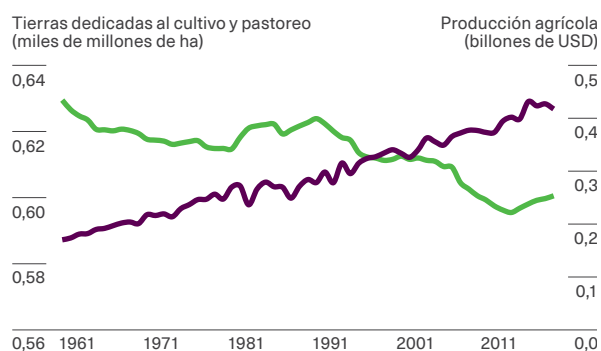
Asia



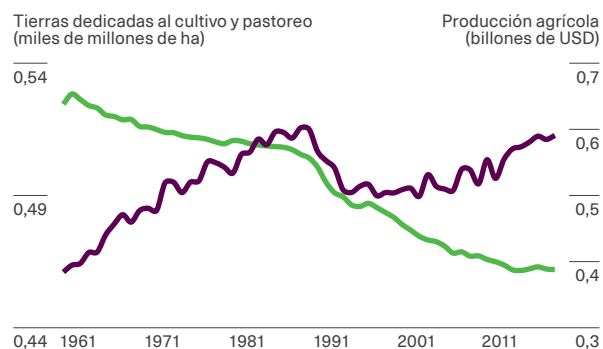
África



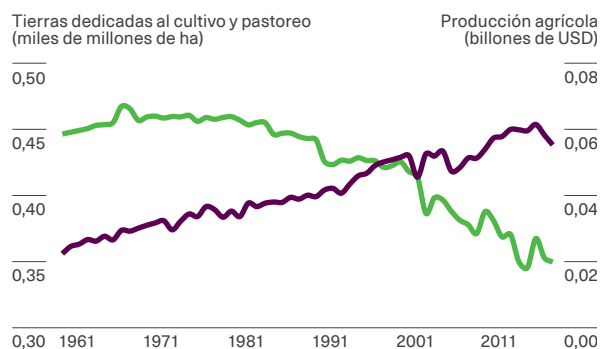
América del Norte



Europa



Oceanía



— Uso del suelo
— Producción agrícola

Nota: El eje derecho de cada panel mide el valor bruto de la producción agrícola para la suma de productos agrícolas y ganaderos y se expresa en billones de dólares estadounidenses de 2015. El eje izquierdo mide el uso del suelo como la suma en miles de millones de hectáreas de tierras dedicadas al cultivo y al pastoreo de ganado.

Fuente: Elaboración propia con base en Klein Goldewijk (2023) y FAO (2025n).

Sectores productivos vinculados a la transición energética

El mundo rural de ALC se sitúa en una posición estratégica en el contexto de la transición energética global, dada su abundancia en recursos naturales (por ejemplo, en minerales críticos) y sus condiciones ventajosas para la producción de combustibles bajos en carbono (como el hidrógeno verde y azul o los biocombustibles). La reconfiguración de los mercados energéticos, al pasar de una dependencia de los combustibles fósiles a un crecimiento en la demanda de alternativas con fuentes renovables y la electrificación, ofrece una oportunidad única a los países de ALC para desarrollar los sectores mineros y energéticos y hacerlo de forma sostenible.



El mundo rural de ALC se sitúa en una posición estratégica en el contexto de la transición energética global, dada su abundancia en recursos naturales, como minerales críticos, y sus condiciones ventajosas para la producción de combustibles bajos en carbono

Minerales críticos y desarrollo de su cadena de valor

ALC cuenta con una dotación abundante de minerales críticos, concentrados mayoritariamente en territorios rurales, lo que posiciona a la región como un actor estratégico en la transición energética global. Chile, Perú y México explican cerca del 45 % de la producción mundial de cobre, con el primero de esos tres países como principal productor global. A su vez, territorios de Argentina, Bolivia y Chile conforman el denominado triángulo del litio, que concentra más del 60 % de las reservas mundiales, principalmente en yacimientos de salmuera (AIE, 2025b; Valencia et al., 2025). Esta dotación ha permitido que la región sea actualmente líder en varios mercados extractivos primarios, en un contexto de creciente demanda

asociada a las energías renovables, los vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias (AIE, 2023b).

Sin embargo, el liderazgo regional enfrenta desafíos crecientes. El descubrimiento de grandes reservas de litio de roca dura y la aceleración de su explotación en otras regiones, con menores costos y tiempos de extracción, están diversificando la oferta global y poniendo presión sobre la posición dominante de ALC. En este contexto, resulta clave avanzar en el desarrollo de la cadena de valor, particularmente en actividades como la refinación y la producción de insumos intermedios y finales, incluyendo baterías (CEPAL, 2023; López et al., 2019). Inversiones adicionales en este ámbito podrían abrir oportunidades de crecimiento y diversificación económica, como la creación de capacidades locales de procesamiento y la producción de componentes para tecnologías de energía limpia (AIE, 2023a). Chile, por ejemplo, ha comenzado a transitar este camino mediante inversiones en investigación y desarrollo vinculadas a la industrialización del litio (CEPAL, 2023).

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) representa un desafío adicional. Si bien su presencia en la extracción de minerales críticos es aún incipiente, la presión de la demanda global y la fragmentación territorial podrían favorecer su expansión. La MAPE emplea a cerca de 1,7 millones de personas en la región, principalmente en zonas rurales, y se caracteriza por altos niveles de informalidad, prácticas ambientalmente dañinas y mayor exposición a organizaciones criminales (Banco Mundial, 2020a; UNODC, 2025a). En este contexto, fortalecer los mecanismos de regulación, control y apoyo a los pequeños mineros será clave para evitar impactos negativos y asegurar una explotación más inclusiva y sostenible (IGF, 2024).

La minería está tradicionalmente asociada a impactos ambientales negativos. La región registra altos niveles de conflictividad social y denuncias por impactos ambientales y sociales, en un contexto marcado muchas veces por la inestabilidad política, económica y regulatoria. Esta situación desincentiva las inversiones de gran escala y largo plazo, dificulta la adecuada captación y distribución de las rentas mineras y profundiza los riesgos ambientales (AIE, 2023b).

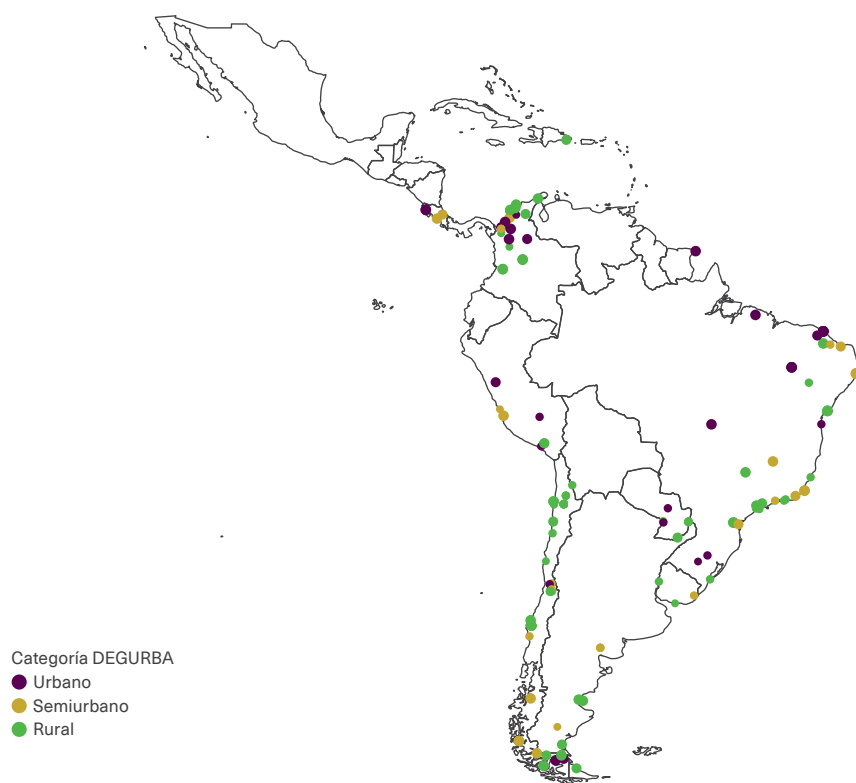
Combustibles bajos en carbono

ALC cuenta con condiciones particularmente favorables para la producción de combustibles bajos en carbono, en especial hidrógeno y sus derivados, así como biocombustibles, aprovechando la abundancia de recursos naturales localizados mayoritariamente en territorios rurales. La región combina un elevado potencial de generación de energía solar y eólica, disponibilidad de agua dulce, y reservas de gas natural, lo que crea condiciones propicias para la producción de hidrógeno verde y azul, con costos que se sitúan potencialmente entre los más bajos en el contexto de la transición energética global (AIE, 2024).

No obstante, el despliegue del hidrógeno verde enfrenta actualmente limitaciones asociadas a sus elevados costos de producción, si bien estos muestran una tendencia decreciente (AIE, 2024). En el caso de ALC, las ventajas en recursos renovables permiten anticipar una inserción en los segmentos de menor costo a medida que maduren las tecnologías y se amplíe la escala de los proyectos, que ya comienzan a desarrollarse en zonas rurales e intermedias de la región. La localización territorial de estos proyectos plantea, a su vez, desafíos vinculados al acceso a agua dulce, que en varios países se está abordando mediante el uso de agua marina desalinizada, reduciendo la competencia con otros usos. La región ya ha avanzado en proyectos de hidrógeno bajo en carbono (figura 1.1).

Figura 1.1

Proyectos de producción de hidrógeno bajo en carbono por nivel de urbanización (DEGURBA)



Fuente: Elaboración propia con base en datos de AIE (2023a) y Schiavina et al. (2023).



Foto aérea de Villa Centro Castillo, Chile.

Los biocombustibles representan otra oportunidad relevante, aunque todavía está en gran medida sin explotar, fuera de la experiencia de Brasil. En particular, la producción de biogás y biometano a partir de residuos agrícolas ofrece una vía atractiva de economía circular, con impactos positivos sobre la diversificación productiva, los encadenamientos locales y los ingresos rurales¹⁵. Estos combustibles destacan por su versatilidad energética: en el caso del biometano por su capacidad para sustituir combustibles fósiles en el transporte sin requerir adaptaciones tecnológicas y en el del biogás por poder destinarse a la generación eléctrica, la producción de calor, la inyección en redes de gas natural o convertirlo en biometano apto para el transporte.

Sin embargo, la expansión de los biocombustibles enfrenta restricciones importantes. El acceso al financiamiento constituye uno de los principales cuellos de botella. La limitada experiencia de los prestamistas con proyectos de producción de biocombustibles, así como la percepción general de riesgo y los largos períodos de recuperación de los proyectos de biorrefinería, suele traducirse en un costo de financiamiento elevado y bajo acceso al crédito (Makepa y Chihobo, 2024; OCDE, 2022a). A ello se suma la competencia por el uso de la tierra en la producción primaria, lo que refuerza la conveniencia de avanzar en esquemas basados en residuos orgánicos, que permitan reducir las tensiones ambientales y productivas.

Sectores forestal, pesquero, acuícola y turístico

Los sectores forestal, pesquero, acuícola y turístico son esenciales para la generación de empleo, la seguridad alimentaria, la diversificación de ingresos y la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, como las mujeres rurales y las poblaciones indígenas. La región cuenta con un gran potencial de aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales para el desarrollo de estas actividades, lo que permitiría potenciar las economías locales.

aumentará el 37 % hacia 2050. El aprovechamiento de esta oportunidad para la creación de bienes y servicios impone presiones sobre el medioambiente, lo que refuerza la necesidad de consolidar una producción primaria y cadenas de valor más sostenibles.



Los sectores forestal, pesquero, acuícola y turístico son esenciales para la generación de empleo, la seguridad alimentaria, la diversificación de ingresos y la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos

Bosques y sector forestal

En ALC se encuentra la mayor extensión remanente de bosques húmedos tropicales del mundo, especialmente en la cuenca amazónica. Las claras ventajas competitivas que muestran varios países de la región en la elaboración de productos forestales, junto con el dinamismo previsto en la demanda mundial de bienes de este origen, apunta a un escenario de expansión de esta actividad. Según las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2022a), el consumo global de productos industriales derivados del bosque

En este contexto, los sistemas de certificación han adquirido un peso creciente. Estos mecanismos permiten diferenciar y valorizar la oferta al abrir las puertas a mercados más exigentes y obligan a las empresas a cumplir con criterios sociales, ambientales y laborales estrictos, lo que contribuye a promover prácticas más equitativas con las comunidades y los trabajadores del sector forestal. Estas certificaciones se vuelven más valiosas en el contexto del

15 Aunque suelen ser más costosos que los biocombustibles primarios, algunos estudios muestran que los combustibles producidos a partir de residuos presentan costos competitivos (Jonker et al., 2015; Macrelli et al., 2012).

Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea (UE), que impone requisitos adicionales para que los productos forestales puedan ingresar a su territorio.

La crisis climática supone una oportunidad para generar ingresos a partir de los recursos y servicios de los bosques, como es el caso de los créditos de carbono. ALC responde por el 45 % del volumen total de créditos voluntarios de carbono en circulación a nivel global¹⁶, mercado que tuvo su pico de volumen de emisiones en 2021, cuando llegó a los USD 2.100 millones anuales (ILACC, 2025). En el mercado voluntario, una proporción considerable de estos instrumentos (el 37 % de los créditos de carbono) proviene de iniciativas vinculadas a la silvicultura y al uso de la tierra. Además del potencial acceso a créditos verdes, la conservación forestal aporta beneficios clave a la regulación del agua y el control de la erosión del suelo, lo cual genera beneficios directos a las actividades de la agricultura.

Pesca y acuicultura

Nueve de cada 10 pescadores en el mundo desarrollan su trabajo de forma artesanal, mayormente en áreas rurales, y sus capturas aportan aproximadamente la mitad de la producción global (FAO, 2016). Con costas en dos océanos y abundantes recursos acuáticos, ALC aporta aproximadamente el 9 % de la producción pesquera y acuícola mundial y el 1 % de las exportaciones (FAO, 2025a). Chile y Perú se ubican entre los mayores productores y exportadores de productos pesqueros del mundo y Ecuador destaca en la acuicultura del camarón.

El principal desafío del sector pesquero en ALC es garantizar la sostenibilidad de las capturas. Solo una de las cuatro zonas de pesca de la región definida por la FAO alcanza niveles cercanos al 85 % de especies marinas evaluadas dentro de límites biológicamente sostenibles¹⁷, mientras que en la zona del sudeste del océano Pacífico este valor cae a aproximadamente

el 33 %. Esta situación se ve agravada por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y por impactos ambientales, como el cambio climático, la contaminación y la destrucción de hábitats, que amenazan la productividad y viabilidad futura del sector.

La acuicultura sostenible se perfila como la principal oportunidad para la región, al permitir responder de manera sostenible a la creciente demanda global de alimentos y reducir la presión sobre las pesquerías marinas y oceánicas (FAO, 2024b). La FAO (2022c) estima que las Américas, incluyendo a Canadá y Estados Unidos, será la región donde más aumentará la producción de la acuicultura, particularmente en Chile, donde se prevé un incremento de casi un 50 % entre 2020 y 2030.

Los productos de la pesca y la acuicultura se encuentran entre los alimentos con mayor contenido nutricional y menor huella ambiental (FAO, 2024b). ALC es la segunda región con menos consumo per cápita de estos productos, con excepciones claras, como Perú y algunos países caribeños. Cambios en las dietas que incorporen más productos de este tipo pueden contribuir a mejorar la seguridad alimentaria regional.

Turismo rural

El turismo en ALC ha crecido consistentemente en los últimos 25 años tanto en ingresos como en visitas, una evolución interrumpida únicamente por la crisis del COVID-19. Informes recientes muestran cambios en las preferencias de los turistas, con aumentos en la demanda de turismo cultural y natural (Gandolfi y Ramírez, 2025), sector de especial importancia para las áreas rurales de ALC.

Particularmente para el mundo rural, se destaca el surgimiento del turismo rural y comunitario. Estas actividades tienden a valorar y preservar los recursos naturales y culturales y a generar ingresos y empleos locales (Gandolfi y Ramírez, 2025). Además, pueden

¹⁶ Los mercados voluntarios de carbono son sistemas globales donde empresas, gobiernos y particulares compran y venden créditos de carbono para compensar voluntariamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, financiando proyectos de reducción o remoción, como los de reforestación o de energías renovables, entre otros.

¹⁷ Los límites biológicamente sostenibles se refieren a los niveles de captura que permiten que una población de peces mantenga su tamaño y reproducción a largo plazo.

ser de especial importancia para las economías con mucha población rural, como es el caso de los países andinos y especialmente los caribeños, dada la importancia que tiene el turismo para sus economías.

Los principales desafíos del turismo incluyen la sostenibilidad de sus actividades, la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático y la provisión

adecuada de servicios básicos. Dado su estrecho vínculo con los recursos naturales, resulta fundamental fortalecer al sector con recursos que permitan invertir en adaptación climática, al tiempo que se desarrolla infraestructura resiliente en las zonas rurales. En este contexto, el acceso a servicios básicos, como agua potable, electricidad e internet, es un factor clave para atraer y diversificar la demanda turística.

Desafíos de la sostenibilidad ambiental y social

El aprovechamiento de las oportunidades productivas del mundo rural plantea desafíos transversales de sostenibilidad ambiental y social, derivados de la expansión simultánea de múltiples actividades económicas sobre territorios y recursos naturales compartidos. Estos desafíos no son específicos de un sector, sino que surgen de la presión creciente sobre bienes públicos y recursos comunes, así como de externalidades negativas que los mercados no internalizan adecuadamente.



El aprovechamiento de las oportunidades productivas del mundo rural plantea desafíos transversales de sostenibilidad ambiental y social derivados de la expansión simultánea de múltiples actividades económicas sobre territorios y recursos naturales compartidos

Uno de los principales desafíos en las actividades agropecuarias, forestales y de producción de biocombustibles es la competencia por el uso de la tierra. Su expansión puede generar riesgos de deforestación, pérdida de biodiversidad y deterioro de la calidad de los suelos si no se acompaña de marcos regulatorios adecuados y prácticas productivas sostenibles. En la pesca, los desafíos se vinculan a la gestión de recursos comunes. La sobreexplotación de los stocks pesqueros, la creciente presencia de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, unida a los impactos derivados del cambio climático, amenazan la

sostenibilidad de largo plazo del sector y los medios de vida asociados en ausencia de sistemas efectivos de regulación, monitoreo y control.

La minería y los combustibles bajos en carbono plantean tensiones ambientales relevantes, vinculadas principalmente al uso intensivo de agua dulce y a los riesgos de contaminación de aguas y suelos. Estas presiones pueden derivar en conflictos territoriales con comunidades locales y afectar actividades económicas preexistentes, como la agricultura o la pesca, especialmente en cuencas fluviales. En este contexto, la expansión de estas actividades exige marcos regulatorios y mecanismos de gestión ambiental que permitan compatibilizar los objetivos de descarbonización con la sostenibilidad de los territorios.

El turismo rural, por su parte, ofrece oportunidades de diversificación productiva, pero también riesgos de degradación ambiental y sobrecarga de infraestructuras cuando su crecimiento no es adecuadamente planificado.

La expansión de las actividades productivas rurales no garantiza, por sí sola, impactos significativos en el empleo local. Muchos de estos sectores son intensivos en capital y tecnología y poco demandantes de mano de obra, por lo que, sin políticas complementarias, sus beneficios tienden a concentrarse y generar derrames limitados. En el agro, esta dinámica es evidente: el empleo rural agropecuario ha disminuido de manera sostenida pese al crecimiento sostenido de la producción y, por primera vez en 2023, representó menos del 50 % del empleo rural total. Sin embargo, el desarrollo de cadenas de valor agroalimentarias

ofrece un canal clave para ampliar los impactos locales en el empleo y los ingresos. Otro sector intensivo en capital es la minería. En este caso, mecanismos de redistribución de rentas mineras y fondos de estabilización, junto con provisiones de contratación de empleo e insumos locales, contribuyen a una mejor captación de las rentas a nivel local. Finalmente, tanto en la minería artesanal y de pequeña escala como en la pesca artesanal y algunas actividades forestales, la formalización del empleo y las mejoras en las condiciones laborales permiten mejoras directas en el bienestar de pobladores rurales.

Maximizar los impactos locales del desarrollo productivo rural requiere condiciones habilitantes

transversales. La inversión en infraestructura, el acceso a servicios básicos y la conectividad, junto con el fortalecimiento del capital humano de la población rural, es clave para que los beneficios del crecimiento sectorial se traduzcan en un desarrollo territorial más inclusivo y sostenible.



La expansión de las actividades productivas rurales no garantiza, por sí sola, impactos significativos en el empleo local

Capacidades institucionales para aprovechar las oportunidades del mundo rural

El aprovechamiento del potencial productivo de los territorios rurales para mejorar el bienestar de su población depende, en buena medida, de la capacidad institucional para orientar y coordinar de forma eficiente el desarrollo de los sectores productivos.

En primer lugar, se requieren instituciones con capacidad para movilizar inversión pública y privada hacia los territorios. Como se documenta en el capítulo 8, la región enfrenta rezagos significativos en infraestructura vial, digital, eléctrica y social, como salud y educación, que condicionan el desarrollo y la integración territorial. Para que esta inversión se materialice en proyectos efectivos, resulta esencial, a la vez, fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos subnacionales que, especialmente en los países más grandes, son los responsables de la formulación, ejecución y supervisión de estas obras (Alves et al., 2025). El fortalecimiento institucional debe complementarse con la capacitación y empoderamiento de los actores locales, incluyendo los productores, las organizaciones comunitarias y las asociaciones rurales. Contar con habilidades técnicas, conocimiento sobre la gestión de los recursos y capacidades de organización permite que las comunidades participen activamente en la planificación, supervisión y gestión

de los proyectos, garantizando que las inversiones e iniciativas se traduzcan en beneficios sostenibles y equitativos, y reduciendo los impactos ambientales.

Un desarrollo rural moderno exige marcos regulatorios coherentes y previsibles, que coloquen la sostenibilidad en el centro de las transformaciones productivas (De Salvo et al., 2025). Regulaciones actualizadas permiten orientar la inversión hacia prácticas más eficientes y sostenibles, facilitar el acceso a mercados con estándares ambientales y sociales e incentivar la innovación. En territorios donde coexisten actividades que compiten por los mismos recursos, son esenciales la calidad y el cumplimiento de la normativa para brindar certidumbre a quienes invierten y producen, prevenir impactos ambientales negativos y conflictos, y asegurar que los beneficios se traduzcan en mejoras para las comunidades locales. En este marco, mecanismos de gobernanza inclusiva que incorporen a las comunidades locales, los pueblos indígenas y los pequeños productores en la toma de decisiones fortalecen la legitimidad de las políticas públicas, contribuyen a una asignación más equitativa de los recursos y reducen los conflictos por el uso del territorio.

Otro aspecto central es cerrar las importantes brechas en los sistemas de información estadística, catastros y datos territoriales. La falta de información sistemática y comparable limita la capacidad de diseñar políticas basadas en la evidencia, monitorear desigualdades y evaluar resultados. En este ámbito, es imprescindible contar con sistemas estadísticos nacionales robustos que integren información geoespacial (Khalil y Di Candia, 2023), dispongan de catastros rurales actualizados y utilicen metodologías armonizadas que permitan la comparabilidad regional.



Cerrar las brechas de infraestructura y promover la integración territorial exige fortalecer las capacidades institucionales y de gestión de los gobiernos subnacionales

La consolidación de un desarrollo rural sostenible también requiere enfrentar la expansión de las actividades ilegales e ilícitas, que afectan de manera creciente a los territorios rurales de la región (Dammert y Sampó, 2025). En muchas zonas, la minería ilegal del oro, la tala no autorizada, la pesca ilícita y otras actividades económicas criminales asociadas a los recursos naturales han generado degradación ambiental, captura de rentas locales y debilitamiento de la gobernanza. A esto se suma la creciente presencia de redes delictivas y organizaciones criminales que, en contextos de baja presencia estatal y limitado control institucional, han incrementado la violencia, las amenazas y los conflictos por el control de territorio (Maloney et al., 2025). Esta combinación de economías ilícitas e inseguridad no solo obstaculiza la inversión y la provisión de servicios, sino que también vulnera derechos y deteriora el tejido social de las comunidades rurales.

Finalmente, el fortalecimiento institucional debe estar acompañado de una mayor integración regional y cooperación internacional. Muchos de los desafíos y oportunidades del mundo rural, como la transición energética, la seguridad alimentaria o la sostenibilidad productiva, trascienden fronteras nacionales. La armonización de normas, el intercambio de información, la cooperación técnica y los acuerdos intrarregionales pueden reducir los costos, mejorar las capacidades regulatorias y ampliar las oportunidades de desarrollo para los territorios rurales (CEPAL et al., 2024). La integración regional ofrece, además, una plataforma clave para fortalecer la voz de ALC en mercados internacionales cada vez más exigentes.